

EL APORTE DEL DIALOGO AL PROBLEMA NACIONAL

El 15 de octubre de 1984 se confirmaba más allá de toda expectativa el ofrecimiento de dialogo que el presidente Duarte había hecho en las Naciones Unidas, siete días antes. No sólo se hicieron presentes en La Palma las más altas representaciones del gobierno y del FMLN-FDR ante la Iglesia como moderadora, no sólo se desarrolló un verdadero diálogo que fructificó en un comunicado conjunto asegurador de la continuación del proceso, sino que se mostró en la calle la posibilidad y el deseo de diálogo entre sectores con intereses y simpatías contrapuestos. Lo que parecía imposible había empezado a ocurrir: las partes contrarias habían encontrado un canal de comunicación política y los contradictores de la solución política negociada no habían sido capaces de impedir su apertura. El presidente Duarte había tenido el coraje de emprender una acción arriesgada y el FMLN-FDR había tenido el coraje de responder a ella constructivamente.

Como logro fundamental de esa reunión histórica puede considerarse el compromiso de que en la última quincena de noviembre se tuviese la primera reunión de la comisión mixta que arreglara cuestiones de procedimiento capaces de adelantar el proceso y que eventualmente preparara acuerdos significativos para ulterior aprobación de las dos partes. Pero esta posibilidad de consolidación del diálogo como medio de solución política puso pronto en guardia a la representación de la extrema derecha económica, militar y política, con lo que el segundo paso estuvo a punto de no darse o de retardarse más allá de las fechas acordadas. Con el pretexto del endurecimiento de las acciones militares del FMLN, reflejado sobre todo en el accidente del helicóptero que transportaba al teniente coronel Domingo Monterrosa y a



otros altos jefes militares y con el ataque masivo a Suchitoto, se quiso argumentar que no había voluntad de diálogo por parte del FMLN-FDR, que se trataba de una maniobra para ganar tiempo y debilitar las posiciones de los militares. Con ello la extrema derecha, que se había visto sorprendida por el hecho y el alcance del diálogo y que no había reaccionado violentamente en un primer momento, antes parecía haber dado el beneficio de la duda al proceso, empezó a maniobrar sobre todo en los estamentos militares haciendo vacilar el proceso. Lo que hizo en 1973 y 1976 con ocasión de proyectos de transformación agraria, lo que hizo en 1979 con ocasión del 15 de octubre de 1979 y los meses siguientes, lo está intentando hacer ahora también. En las otras tres ocasiones triunfó o, al menos, impidió ser derrotada. Hoy, otra vez, va a pretender lograr lo mismo. Ya ANEP se ha retirado de la comisión asesora del diálogo, ya ha surgido un nuevo comando amenazador, ya salen en los medios de comunicación amenazas más o menos explícitas a quienes impulsan el diálogo. Ciertamente todavía lo hacen en tono menor, lo cual demostraría su menor consistencia y el debilitamiento de algunos de sus puntos de apoyo principales. Pero el pulso al gobierno está en marcha y con ello las perspectivas del diálogo sí, por un lado, se hacen más oscuras, por otro, se hacen más válidas. Se está tocando de nuevo, aunque de otra forma, el poder de la extrema derecha.

Afortunadamente el primer combate ha sido ganado por las fuerzas de la razón. Se ha confirmado el 30 denoviembre -en el último límite del plazo previamente acordado- como fecha de la nueva reunión, y es de esperar que en ella las partes representativas consoliden el proceso, dejen de lado subjetividades y se afanen en dar al pueblo salvadoreño nuevos signos de esperanza.



Como contribución a este proceso quisiéramos en este editorial poner al día nuestras ideas sobre el proceso de diálogo. Hemos venido defendiendo hace ya muchos meses la necesidad no sólo del diálogo sino de una estricta negociación. En agosto de 1983 editorializábamos acerca de este problema con el título "Diez tesis sobre un proceso de negociación" (ECA, Jul.-Ag., 1983, 601-628). Lo que entonces era posibilidad se ha convertido hoy parcialmente en realidad. A lo largo de este año hemos venido insistiendo en lo mismo de distintas formas en casi todos los editoriales de nuestra revista. Pero ahora es necesario ceñirse más a la coyuntura para decir desde ella lo que puede esperarse de este proceso que acaba de abrirse. Tal vez ello sirva para quienes tienen en sus manos la responsabilidad del diálogo, pero también para todos aquellos sectores nacionales y aun internacionales que quieren una solución justa, digna y pronta a la agonía en que se debate el pueblo salvadoreño. Lo haremos por razones de claridad en forma de tesis y manteniendo un cierto esquematismo que facilite la comprensión y la discusión. En este momento es imprescindible lograr un máximo grado de racionalidad y de claridad mental que se conviertan en conciencia generalizada, pues sólo con el respaldo y aun la presión popular podrá obtenerse algo que realmente sirva para encontrar la mejor solución posible por encima de las presiones y de las amenazas que se están dando y que, sin duda, se seguirán dando en cuanto se vea que el diálogo puede ser una medida eficaz para conseguir una paz justa en El Salvador.

1. El diálogo ya iniciado responde a una necesidad nacional.

Cuando hablamos de necesidad nacional no queremos decir que el diálogo se impondrá necesariamente en El Salvador, cualesquiera sean las voluntades de



los actores sociales, sino que es algo que se necesita cada vez más para salir del conflicto que nos domina y para salir de él en las mejores condiciones de cara al presente y futuro del país. Es precisamente esta necesidad, nacional e internacional, la que ha forzado a iniciar el diálogo a las dos partes en conflicto, a pesar de sus intereses contrarios. No se explicaría, en efecto, que ambas hubieran acudido al mismo remedio, si es que esa necesidad no se hubiera hecho presente, aunque de distinto modo para cada una de ellas.

Ante todo, cada vez va apareciendo más claro, después de cuatro años de guerra civil, que la solución puramente militar no puede traer una paz justa y a tiempo de detener el proceso de destrucción, antes de que se vuelva irreversible. La guerra que comenzó en Enero de 1981 ha demostrado que puede potenciar a ambas partes en conflicto, pero no puede -no ha podido- poner en franca superioridad a una sobre otra. El fortalecimiento militar de ambas facciones es innegable, pero la proporción de uno a cinco que se tenía al principio sigue manteniéndose ahora, dilatando sin término previsible el final del conflicto por la vía de la fuerza. Ambas partes tienen motivos para sentirse satisfechas de su desempeño, lo cual retroalimenta su subjetividad militar, pero apenas es perceptible que el pulso entre ellas empiece a decaer ni siquiera ligeramente de un modo sostenido en favor de nadie. Por otro lado son innegables los enormes costos de la prolongación de la guerra tanto en vidas humanas y en destrucción de la infraestructura económica como en la militarización de la vida social y política, en la degradación de la coexistencia social y en tantos otros efectos, cuya superación va resultando cada vez más difícil no sólo para nuestra generación sino para las futuras.



Ha llegado el momento de decir que los bienes atribuidos a la guerra pueden ser consolidados y superados sin ella. Puede aceptarse con razonabilidad que sin la actividad militar del FMLN, última posibilidad a la que recurrió una vez cerrado todo otro camino, hubiese sido del todo improbable que se hubieran dado los relativos avances de las reformas estructurales en el país, que se hubiera debilitado en alguna medida la fuerza de la extrema derecha económica, política y militar e incluso que se hubiese dado un cierto proceso de democratización. Es cierto que esa actividad suscita en un primer momento los efectos contrarios y es también cierto que esos efectos beneficiosos no se logran sin la mediación de Estados Unidos. Pero si el gobierno de Reagan acabó favoreciendo estos avances relativos lo hizo forzado por la presencia del FMLN-FDR, por la necesidad de legitimar una guerra para la que se requerían cuantiosos recursos económicos que debieran ser aprobados por un Congreso muy sensible a la opinión pública. Pero, aun siendo esto así, ha de reconocerse también que la razón objetiva de las mayorías populares absolutamente empobrecidas, oprimidas y reprimidas, fue recogida por los movimientos revolucionarios, que a su vez se hicieron fuertes en el servicio de esa razón objetiva. Ha habido en la guerra y por la guerra una consolidación del FMLN, que representaba y todavía representa en buena medida la necesidad objetiva de un profundo cambio social y también la capacidad de defensa organizada de esa necesidad. Parece, no obstante, irse acercando el momento de que esa consolidación ya no necesite tanto de la guerra misma.

Han sido y siguen siendo los factores militares los que paradójicamente fuerzan más el diálogo, a un diálogo evidentemente que no sólo termine con la guerra sino que traiga la paz y el orden socio-económico que necesita el país.



En efecto, si la guerra hubiera llevado al triunfo de una de las partes o llevara el camino de lograrlo, el diálogo no se presentaría como una necesidad para conseguir la paz. Pero este no poder conseguir el triunfo absoluto y rápido muestra que hay condiciones objetivas dentro y fuera del país, que no pueden ser manejadas y superadas de modo predominantemente militar. La presencia hegemónica de Estados Unidos en el área centroamericana no puede ser manejada mediante un enfrentamiento militar en contra de sus intereses. Por el contrario la fuerza militar del FMLN y su enraizamiento en el territorio y en las masas viene demostrándose como imbatible, al menos en los términos que permite la coyuntura política dentro y fuera del país. Pero no es lo mismo no perder que ganar. No basta con no perder indefinidamente. Las cosas tienen su plazo y no es de ninguna manera suficiente para el pueblo salvadoreño que el FMLN no sea derrotado militarmente. Convertir la guerra en un fin en sí mismo sería la muerte de todos, también de los mejores ideales del movimiento revolucionario. Por ello de parte y parte por la misma fuerza de los hechos militares se hace perentorio el recurso al camino del diálogo y de la negociación.

Este no poder conseguirse el triunfo militar por ninguna de las dos partes implica datos objetivos contra los que sería torpe empecinarse. Si la Fuerza Armada, a pesar de su crecimiento cuantitativo y de su mejora cualitativa y a pesar de la enorme ayuda recibida por Estados Unidos no ha podido derrotar el FMLN en cuatro años de guerra, esto significa no sólo el poder militar del FMLN sino también su enraizamiento en las masas; es imposible en un país de las dimensiones y de la geografía de El Salvador, mantener una guerra tan total sin ser derrotado, máxime al no contar con fronteras aliadas, más que si



se cuenta con un fuerte y extendido apoyo popular. Pero, por otra parte, si el FMLN no ha podido triunfar, hay que concluir también que ese apoyo popular no es masivo, porque con un apoyo popular masivo y la enorme fuerza militar del FMLN, la Fuerza Armada no hubiera podido resistir y ha resistido, sin la necesidad de una intervención directa de los marinos norteamericanos. Hay que reconocer en consecuencia que la estructura social de El Salvador es en la actual coyuntura bastante compleja y no se describe bien con posiciones extremas de blanco o negro. No hay sólo fuerzas oligárquicas y anti-oligárquicas sino que hay un espectro reformista más amplio dispuesto a debilitar a la oligarquía por medios distintos a los del FMLN.

Hay otros argumentos para razonar la necesidad del diálogo, del arreglo pacífico o político del conflicto. Pero no es necesario insistir en ellos porque su evidencia y su peso es claro. Se necesita cuanto antes la paz, el cese de las hostilidades al menos, para empezar una reconstrucción cuyo retraso causa de por sí males de enorme trascendencia en el presente y en el futuro del país. El que ambas partes en conflicto hayan aceptado el diálogo y lo estén impulsando, a pesar de las dificultades que entraña, es una contraprueba de esa necesidad objetiva que se va imponiendo independientemente de las voluntades subjetivas y de los intereses hasta ahora predominantes. Lo que parecía imposible en el fondo y en la forma del diálogo hace tan sólo pocos meses se ha convertido ya en un hecho y un hecho bien recibido por gran parte de la población, como enseguida desarrollaremos. Por otro lado, el que ambas partes, a pesar de sus grandes diferencias, vean ventajas en el diálogo, se hayan atrevido con él, no obstante los riesgos que comporta, muestra que efectivamente estamos ante una necesidad objetiva que se ha ido imponiendo poco a poco, al menos entre aquellas personas y grupos a los que no les ciegan intere-



ses y modos de pensar ya insostenibles, tras los más de cincuenta mil muertos y los más de un millón de desplazados dentro y fuera del país.

2. El diálogo responde al deseo mayoritario del pueblo salvadoreño.

No siempre las necesidades objetivas se reflejan en la conciencia y en el deseo de la mayor parte de la población. Al menos de forma inmediata. Sin embargo, esa necesidad del diálogo que ya se daba en El Salvador desde hace meses, se va reflejando cada vez más en la conciencia social. De diversas formas puede sentirse el deseo mayoritario de aprovechar el camino del diálogo para acelerar la pacificación y la paz que responda a las necesidades del país y también al estado en que se encuentran las distintas fuerzas que se dan en él. Puede pensarse que este deseo mayoritario no tiene de por sí fuerza suficiente para obligar a la búsqueda de la pacificación por el diálogo, pero es al menos un signo más de la necesidad de ese diálogo y de la disposición a aceptar los resultados. Muchas veces los sectores dominantes han podido pasar por encima de la voluntad popular tan pocas veces respetada en El Salvador por quienes tienen el poder y las armas. Sin embargo, ese deseo que es cuantitativa y cualitativamente significativo expresa cómo es la realidad de la situación y debe tenerse en cuenta dejando de lado apriorismos dogmáticos o imposiciones totalitarias. El hecho de que haya una mayor parte de la población deseosa de acelerar el fin del conflicto y la instauración de la paz por la vía del diálogo y de la negociación muestra que más allá de la voluntad mayoritaria de por sí tan respetable está la realidad misma de la que esa voluntad es eco.

Las encuestas muestran desde hace meses un incremento constante en las opinio-



Las encuestas muestran desde hace meses un incremento constante en las opiniones favorables al proceso del diálogo. Este incremento se ha visto reforzado tras la buena impresión causada por el primer encuentro de La Palma. Tras él más de un ochenta por ciento de los encuestados aprobaba la iniciativa y sólo un ocho por ciento estaba en contra de ella. Ya meses antes, cuando toda la propaganda iba a favor del proceso electoral las encuestas mostraban un alto índice interesado en que se probara el proceso del diálogo como vía alternativa o complementaria. Datos tanto más significativos cuanto que la palabra diálogo, como años atrás el término reforma agraria, se consideraba un concepto subversivo, cuyo uso podía traer y traía consecuencias represivas. No sólo se habla ya con mayor confianza del diálogo sino que se lo aprecia como una propuesta nacional, hoy oficializada gubernamentalmente, y ya no como una iniciativa del FMLN-FDR. Al ser promovido por las Naciones Unidas, por la Internacional Socialista, por Juan Pablo II y, en el interior del país, por la Iglesia y por la UPD entre otras fuerzas sociales, se ha ido consolidando al menos como posibilidad desde una perspectiva mayoritaria.

Ni siquiera las fuerzas de extrema derecha se atrevieron en un primer momento a rechazar frontalmente el diálogo, como lo habían hecho meses antes con él y con otras medidas que pudieran suponer un avance político y social en la solución del conflicto salvadoreño. Sólo los escuadrones de la muerte y con poca fuerza salieron en público contra el nuevo proceso por su habitual procedimiento de desfigurar y de amenazar a muerte a quienes lo propiciaran. En un primer momento el primer paso dado no fue combatido más que en cosas accidentales y no en lo que tenía de fundamental. El presidente Duarte había manejado bien



a los sectores de la empresa privada y a la Fuerza Armada, de modo que no era fácil oponerse, máxime después del triunfo popular y político que supuso la reunión de La Palma. ANEP fue informada y más tarde incorporada a la comisión asesora del diálogo y, aunque ha acabado retirándose, en un primer momento qu
dó comprometida y sus reservas no cobraron la virulencia y la publicidad que hubieran podido esperarse de anteriores reacciones. Ni siquiera el partido de extrema derecha y su máximo representante se atrevieron a hablar de traición a la patria y a la Fuerza Armada. Los voceros ideológicos del extremismo de derecha en los medios de comunicación tuvieron que contentarse con formas obliu
uas de ataque y de desinformación. Todo ello demuestra que era peligrosamente antipopular presentarse en esta ocasión como fuerzas opositoras al diálogo.

Ciertamente tras casi un mes de vacilación la extrema derecha se ha dado cuenta de lo peligroso que podía ser para sus intereses la consolidación del proce
so de diálogo. Pero su violento esfuerzo por impedirlo no se ha hecho a la luz pública sino en la oscuridad, utilizando su capacidad de presión económica y sus redes de poder. Eso mismo demuestra que, por un lado, el proceso del diálogo es algo con grandes posibilidades en favor de una pacificación democrát
tica que sitúe en el sitio que le corresponde a la extrema derecha y, por otro, que la oposición en público a él sigue siendo antipopular y les pudiera causar un serio revés en las elecciones programadas para el 17 de marzo de 1985.

También internacionalmente se ha dado un apoyo serio al diálogo. El presidente Reagan escribió dos cartas personales al presidente Duarte alabando la iniciativa y el coraje que ella implicaba al tiempo que daba su respaldo, una vez obtenidas determinadas condiciones; Schultz vino a El Salvador e igualmente,



ante la empresa privada y la Fuerza Armada, hizo clara demostración de que Duarte contaba con el apoyo sólido de Estados Unidos. Por otro lado, la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua mostraron también su simpatía por el diálogo en paradójica coincidencia con su oponente principal. También la Iglesia y el Vaticano en particular se mostraron esperanzados por el nuevo paso. No se han escuchado voces discordantes y tan sólo los representantes de un extremismo sin rigor lógico ni compromiso histórico hicieron sus salvedades en nombre de la revolución.

Este apoyo a la iniciativa del diálogo podría aun ser mayor si se lo fomentara de modo razonable, sobre todo en el interior del país que es donde más importa. El proceso es complejo y será difícil. Al pueblo no le es fácil entender cómo recién terminadas las conversaciones de La Palma, arreciaron los combates militares, los sabotajes, las acciones policiales. El pueblo sigue muy mal informado sobre todo esto, a merced de unos medios de comunicación que con frecuencia ocultan y distorsionan la realidad, aprovechándose de lo accidental para deformar lo esencial. Así y todo es innegable la voluntad mayoritaria en favor del diálogo sin poder precisar todavía el carácter técnico del mismo pero esperando de él un avance sustantivo en la solución justa y rápida del conflicto salvadoreño. Y esta voluntad mayoritaria no es sólo un fundamento firme sobre el que levantar el diálogo sino también una prueba de que algo nuevo se está gestando en el país, un cierto consenso mayoritario en lo fundamental, que harían bien en respetar las partes en conflicto.

3. La decisión de emprender la vía del diálogo es firme y seria por ambas partes.

No puede negarse que una de las dificultades del diálogo ha estado hasta ahora



en la desconfianza mutua. La parte gubernamental entendía que el FMLN-FDR no proponía el diálogo más que como estratagema que le sirviera para llevar adelante con ventaja su estrategia principal. El FMLN-FDR no creía que la parte contraria podría aceptar la propuesta del diálogo, de tal modo que, cuando la aceptó y aún tomó la iniciativa, no pudo menos de pensar que se trataba también de una estratagema para contrarrestar la oferta del enemigo. Es importante superar esta mutua desconfianza, que en este momento resultaría injustificada y, desde luego, contraproducente, sin que ello suponga caer en ingenuidades idealistas, que tampoco son del caso. Un análisis desapasionado y objetivo de las actitudes de ambas partes en conflicto permite afirmar que ambas han emprendido esta nueva etapa del diálogo con cautelas y desconfianzas sin duda, pero también con seriedad y firmeza. No queremos decir con ello tan solo que así debería ser sino que así está ya siendo. Examinemos la cuestión por separado, pues cada una de las partes tiene distintas razones e intereses para acudir al diálogo.

Duarte y su gobierno han emprendido el diálogo dándole una importancia grande y comprometiéndose con él ante el pueblo salvadoreño y ante la opinión pública internacional. Aunque no se ha comprometido en un camino sin retorno y aun cuando deja abiertas salidas, no hay duda de que un fracaso en el proceso podría resultarle fatal no sólo para traer una solución seria y definitiva a los problemas del país sino también para su consolidación política así como la de su partido. Duarte con esta medida audaz está corriendo serios peligros, fuertes riesgos políticos, lo cual carecería de sentido si su iniciativa careciera de seriedad y firmeza. Evidentemente él quiere conseguir la paz por su camino, por la vía de un diálogo que le resulte transitable en todo mo



mento, pero el haber elegido esta vía difícil y riesgosa muestra la seriedad del propósito.

Aunque la oferta tiene límites bien precisos, no por eso ha de concluirse que se trata meramente de una maniobra engañosa. Ante todo, no puede decirse que, al emprender esta iniciativa, Duarte haya sido meramente un instrumento de un plan más amplio concebido y dirigido por la administración Reagan. Así como consta que la embajada norteamericana fue consultada previamente -y esto muestra los límites de la fuerza y de la autonomía del gobierno salvadoreño-, también consta que la iniciativa no partió de ella y que más bien fue desaconsejada en un primer momento. La ulterior aprobación pública por parte de la administración Reagan y del propio presidente norteamericano prueba de que se le dieron seguridades y de que se aceptaron unos límites intraspasables, pero no niega que se siga dando una relativa autonomía que puede crecer ni menos prueba de que se trate de una maniobra.

Duarte, en efecto, había tomado en consideración la posibilidad del diálogo aun antes de llegar a la presidencia. Y esto tanto por análisis racional de la situación salvadoreña como por presiones razonables de diversas personas, sectores y partidos que le merecen credibilidad. Ha esperado a consolidarse en el poder para empezar a poner en marcha el mecanismo y ha pensado que tras cuatro meses de gobierno está lo suficientemente consolidado como para atreverse a esta acción arriesgada y de graves consecuencias, muy favorables si sale bien, muy desfavorables si sale mal. A una pura maniobra no se le puede dar el marco externo e interno que se ha dado al diálogo. El anuncio solemne ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y la publicidad que se dió a



la reunión de La Palma no permiten pensar en juegos de apariencias. Si comparamos, por otra parte, los gestos que en esta línea hizo el presidente Magaña con los hechos por Duarte, se puede ver lo abismal de la diferencia. La misma reiteración del encuentro, no obstante las dificultades habidas, refuerza la seriedad del propósito. En general el modo como se realizó el primer encuentro y los compromisos que de él se siguieron y que se han puesto en práctica prueban la seriedad de la oferta en lo que tiene de diálogo. La decisión puede ser frágil y reversible, lo cual dependerá fundamentalmente de cómo discurra el diálogo y de cómo se consolide el poder de Duarte. Pero insistimos una vez más el que sea frágil y reversible por motivos serios no significa que el arranque haya sido una maniobra de distracción o un intento para ganar al interior tantos políticos.

Es que, en definitiva, el gobierno necesita del diálogo para terminar con el conflicto y con los problemas que afligen a El Salvador del modo más favorable para él y para su partido. Demos por descontado que el gobierno también se preocupa por los intereses nacionales y aun por los intereses de las mayorías populares al menos a su modo. Además de ello, el diálogo, a pesar de sus riesgos, le trae importantes ventajas. Efectivamente, la vía militar para terminar con el conflicto le trae enormes desventajas tanto desde el punto de vista del nacionalismo como desde el punto de vista del civilismo democrático. La guerra no sólo hace a El Salvador más dependiente de Estados Unidos sino que hace a los civiles más dependientes de los militares; si la guerra es ganada por los militares, el poder quedará reconfirmado en manos de los militares por muchos años más, y si la guerra debe ser mantenida por largo tiempo, la presen



cia dominante de Estados Unidos en El Salvador se prolongará y se acentuará. Ninguna de ambas cosas conviene a un partido que se profesa nacionalista y que desea la democratización del país, uno de cuyos elementos es la sumisión constitucional del poder militar al poder civil libremente elegido. Por otro lado, la destrucción que trae consigo la prolongación de la guerra va a imposibilitar una labor efectiva de gobierno, que traiga algún tipo de solución a los gravísimos problemas del país; puede tal vez mejorarse en la cuestión de los derechos humanos, y esto supone un respiro importante para el pueblo, pero un inicio de desarrollo económico o simplemente de freno al subdesarrollo creciente en el que estamos metidos no parecen posibles mientras la mayor parte de los recursos del estado se dediquen todavía a la destrucción.

En esa línea merece atención especial el proyecto de reformas estructurales, cuyo éxito es fundamental para la política del Partido Demócrata Cristiano. Es cierto que las reformas estructurales son potenciadas políticamente por la guerra, en cuanto la guerra muestra la potencia de los revolucionarios a quienes se quiere arrebatar la bandera del apoyo popular, pero mientras dure la guerra es de todo punto improbable que las reformas, sobre todo la agraria, tengan alguna efectividad y se conviertan en verdadero alivio de los beneficiados de la misma. El proyecto reformista, la revolución no violenta de la que habla Duarte, está llamado al fracaso, si se prolonga la guerra. Finalmente, el terminar con la guerra de un modo rápido, estable y justo harían de este gobierno uno de los más decisivos de la historia de El Salvador, y esto no puede menos de ser un objetivo para el gobierno, para el presidente y para su partido.



Por todo ello puede concluirse que el diálogo no es sólo una necesidad nacional que se ha impuesto como tal a gran parte de la población y también al gobierno que en su actuar de todos los días ve cuán necesario es salir cuanto antes de la guerra, sino que también es un propósito serio del actual gobierno. Lo cual, repetimos, puede dejar de serlo, si se convierte en una trampa que le traiga mayores desventajas que beneficios. Una cosa no empieza la otra. Pero si no partimos de la seriedad con que el gobierno ha emprendido el difícil camino del diálogo, no sólo nos quedamos sin un recurso importante para el avance político sino que echamos a perder por prejuicios una posibilidad real de avanzar.

Por parte del FMLN-FDR la propuesta de diálogo es también seria y radical, aunque como en el caso de su contraparte tiene también sus límites. Es cierto que esa propuesta ha cobrado en el fondo y en la forma distintas características a lo largo de los últimos años, pero es también cierto que el FMLN-FDR no ha dejado de hablar de la necesidad del diálogo y de la negociación desde 1981, una vez que la ofensiva de Enero no tuvo los resultados previstos. Más aún, fue el FMLN-FDR quien, tras la llegada a la presidencia de Duarte, se apresuró a renovar la oferta de diálogo, concediéndole con ello una cierta representatividad nacional y una cierta autonomía.

Hay que reconocer que la propuesta del FMLN-FDR en relación con el diálogo, si ha sido uno de los elementos permanentes de su planteamiento, no ha sido nunca el principal. Sin serlo todavía, va cobrando cada vez mayor peso y mayor racionalidad. Puede decirse que en los primeros meses de 1981 era todavía una maniobra con la que se pretendía principalmente ganar tiempo y



conseguir divisiones en el campo adversario. Pero ya en 1982 y 1983 las cosas van cambiando y se convierte en elemento táctico que obliga a ciertas renuncias para conseguir que el proceso avance. Finalmente en el segundo semestre de 1983 y cada vez más durante 1984 el diálogo y la negociación se constituye en elemento estratégico de su planteamiento, al reconocer que no puede llegarse a la solución rápida y menos costosa del conflicto más que por el camino de la negociación. Este paulatino y razonado cambio se ha debido a un mejor análisis de la realidad, al ponderar que la marcha de los acontecimientos militares, la evolución del movimiento de masas, el peso de la coyuntura centroamericana y la presión de las superpotencias, no permitían caer en sueños revolucionarios idealistas. Aunque la gestión militar del FMLN era positiva y aunque era también positiva la gestión política del FDR-FMLN, las dificultades se engrandecían y esto obligaba objetivamente a dar al diálogo y a la negociación un rango cada vez mayor en la estrategia general.

La misma argumentación vale para las metas que se proponían como logros mínimos del diálogo/negociación. En 1981 el marco de la misma era la hegemonización del poder del estado por la alianza obrero-campesina, que podía permitir junto a ella otras fuerzas, pero siempre de modo subordinado y que podía permitir asimismo un cierto respeto de las libertades fundamentales para todos, pero también subordinado a las exigencias de las mayorías populares. En 1983-1984 el marco es distinto: no se trata ya de un gobierno hegemonizado por el FMLN sino de un Gobierno de amplia participación nacional, cuyo programa además se concilia mejor con los intereses pluralistas e interclasistas que corresponderían a ese gobierno en el que no hegemonizaría ninguno



de los sectores sociales o políticos sino que todos ellos, tal vez excluidos los estrictamente oligárquicos, podrían hacerse presentes en pie de igualdad.

Que estos cambios tanto en el peso de la negociación como en el contenido de la misma han sido tomados tras larga y difícil reflexión y constituyen una propuesta seria puede probarse por los enormes costos que han producido al interior del movimiento revolucionario. En él no sólo se han dado enormes tensiones que han consumido muchísimo tiempo y energía sino que esas tensiones han llevado a una de las organizaciones fundamentales, la FPL, que en un tiempo representó la fuerza más intransigente, a una trágica crisis interna, visibilizada tanto en el asesinato de la comandante Ana María y del suicidio del comandante Marcial, supremos dirigentes de la misma, como a una cierta disidencia que ha dado paso a un nuevo grupo revolucionario. Los cambios, pues, no han sido tan sólo aparentes ni pueden desestimarse como pura manio-
bra. Son serios y han costado sangre.

No por eso ha de pensarse que el diálogo/negociación es la última medida desesperada a la que se agarrara el FMLN-FDR para llevar adelante sus propósitos. No sólo no les va mal en la guerra sino que siguen pensando que el elemento principal de su estrategia sigue siendo, mientras un proceso de negociación no de paso a concesiones necesarias y suficientes, la lucha armada. Saben ellos que no se les hace caso por sus razones ni por sus méritos pasados sino por la fuerza que representan y en este momento la expresión más vigorosa de esa fuerza es su potencia militar. Sigue siendo, pues, la fuerza militar la que obliga al adversario a hacer concesiones y a sentarse a dialogar, pero eso no quita para que ellos mismos reconozcan los límites reales



que tienen en la actual coyuntura los medios exclusivamente militares: no se ve que sólo con el uso de la fuerza militar se llegue a una solución pronta, la militarización creciente trae al país y a las propias organizaciones revolucionarias daños de largo alcance, y los costos de todo tipo que trae la prolongación del conflicto son tan altos que exigen buscar medios eficaces para reducirlos. Este planteamiento confirma una vez más la necesidad, las posibilidades y los límites del diálogo.

Por otra parte el FMLN-FDR necesita hacerse presente en la arena política de El Salvador de una forma no clandestina, no perseguida por los cuerpos de seguridad y no agredida por los escuadrones de la muerte. Entre la población civil, si excluimos las zonas bajo control del FMLN y aquellos otros sectores en las ciudades que simpatizan desde antiguo con el movimiento revolucionario, la presencia y eficacia política del FMLN-FDR es escasa. Su mensaje llega muy débil y distorsionado a la mayoría de la población; su actividad es dificultada y casi imposibilitada. Es menester para el FMLN-FDR encontrar un lugar político que hoy no tiene para concientizar y movilizar a una gran parte de la población a la que en 1980 tenái acceso, pero a la que hoy no lo tiene. Esto se empieza a lograr últimamente precisamente por la puesta en marcha del diálogo. Pero es claro que se consolidaría si el diálogo se llevara con total seriedad y si con él se lograran resultados tangibles que permitieran y posibilitaran la presencia del FMLN-FDR ante gran parte de la población, a la que ahora no tiene acceso. Es una razón más que demuestra la necesidad del diálogo para el FMLN-FDR y consiguientemente la seriedad con que lo emprenden.

Esto no obsta a que puedan reconocerse diferencias respecto del diálogo y la



negociación entre las distintas organizaciones y partidos que se encuadran en el FMLN-FDR. Pensamos que en lo esencial hay una posición unitaria res paldada por todos los grupos. Hacer cábalas por presencias y ausencias de unos y otros en las sesiones o en la composición de las comisiones, carece de fundamento. No puede pensarse que algunos de los grupos del FMLN-FDR está en contra del diálogo o que alguno de ellos le dé poca importancia. Al contrario, hay una convicción compartida de su necesidad y de su oportunidad. Las diferencias por otra parte legítimas están en la importancia mayor o menor que deba darse al diálogo en el conjunto de la estrategia y en los contenidos que en cada momento pueden ser negociados. Pero, aun con ello, pareciera que puede apreciarse una voluntad de consenso, de tal modo que en lo fundamental se presentaría una posición común, aceptada por todos y a la que todos acatarían, una vez logrado el compromiso.

No hay que desconocer tampoco la presión que países y partidos simpatizantes del FMLN-FDR hacen en favor del diálogo, lo cual no sólo les ayuda a convencerlos de su conveniencia sino que hasta cierto punto les inclina a ceder en aquellas cosas que pudieran estimarse como dudosas. El FMLN-FDR tiene sólidos y diferenciados apoyos externos que le sostienen pero también le limitan y aunque no dependa absolutamente de ellos, le es conveniente mantener un cierto tipo de relaciones que en el fondo ayudan a un sano pragmatismo que tiene en cuenta la correlación de fuerzas y el carácter de la coyuntura. Que estén dispuestos a nuevos avances tanto en el puesto que atribuyen al diálogo/negociación en su estrategia general como en las concesiones que están preparados para ofrecer es prueba de su voluntad de arreglo político y ofrece una base sólida para llegar a él.



4. El diálogo, a pesar de sus limitaciones, constituye un avance importante para la solución del conflicto salvadoreño.

Todavía no puede decirse que el diálogo se haya constituido en un elemento decisivo a la hora de encontrar soluciones. El diálogo disputa en inferioridad de condiciones su coeficiente de efectividad con otros elementos más operativos de nuestra coyuntura. Las acciones militares por parte y parte tienen mayor peso y de ellas va a depender en gran medida hacia donde se decante la solución. La voluntad de Estados Unidos constituye asimismo un factor de mayor importancia sobre todo por su capacidad de veto, pero también por la orientación que esté dispuesta a dar al proceso. Igualmente la posición de la Fuerza Armada, no sólo por su participación en la guerra si no por sus posibilidades reales de poner freno a las iniciativas del poder civil es algo que puede condicionar, limitar o impedir cualquier efectividad autónoma del diálogo. El proceso electoral iniciado en 1982, continuado en 1984 y programado para 1985 tiene un peso importante, que no excluye necesariamente las virtualidades del diálogo y que incluso pudiera constituirse en dinamizador del mismo, así como el diálogo es dinamizador y purificador de él; en el proceso electoral, además, están involucradas fuerzas políticas que no han sido incorporadas al diálogo y que, por tanto, no van a permitir que éste se constituya en un factor principal que deje en segundo lugar los eventos electorales. Por otra parte, aunque la parte gubernamental tenga un interés serio en el diálogo, su interés político no se reduce al diálogo ni siquiera está centrado principalmente en él, por lo cual éste se enfrenta también con los límites del resto de intereses y urgencias políticas del gobierno.



Por otro lado, aunque el diálogo ya se ha abierto y ha encontrado en principio una acogida favorable, está todavía lejos de consolidarse como vía alternativa. La ruptura que supone con el pasado y el inicio de un nuevo proceder son dos logros fundamentales de verdadera transcendencia histórica. El proceso ha sido sacudido por muy fuertes presiones, pero no ha sido todavía detenido sino que al contrario ofrece perspectivas de avance. Pero esto no obsta para que se reconozca que es aún un proceso débil y fácilmente detenible, cuando no reversible. Hay que tener presentes las graves dificultades para que el diálogo se consolide. Los intereses contra él de parte sobre todo de la extrema derecha en todas sus manifestaciones son sin duda grandes y cuentan todavía con poderosos medios de presión. La necesidad de que ambas partes tienen de continuar la guerra, si por un lado favorece el diálogo al mostrar su necesidad por la fuerza que ambas partes siguen mostrando, por otro crea condiciones subjetivas y pretextos que lo dificultan al máximo. Es muy fácil a los enemigos del diálogo, apoyarse en los destrozos de la guerra para desacreditarlo y así desanimar al pueblo que ha puesto su confianza en él y animar a quienes buscan hacerlo fracasar.

No obstante todas estas dificultades y limitaciones, hay que reconocer también sus enormes posibilidades y con ellas el avance que puede suponer. El diálogo es algo nuevo en la situación conflictiva del país, es un factor nuevo que, bien trabajado, puede hacer avanzar el proceso que nos lleve más cerca de las verdaderas soluciones.

Ante todo, el diálogo sitúa a ambas partes en posición más realista. El gobierno reconoce algo que hasta ahora no se había reconocido y también el



FMLN-FDR reconoce lo que no había reconocido; el reconocimiento mutuo todavía no es total y no se adecua completamente a las respectivas realidades pero se acerca más a la realidad. Este es un punto de extraordinaria importancia, porque sin posiciones realistas es difícil encontrar soluciones realistas. Hoy se reconoce ya, por parte y parte, que hay dos poderosas fuerzas en conflicto, lo cual hasta ahora era negado a nivel político-legal. Hay, ahora al menos, un reconocimiento de hecho, que va más allá de planteamientos puramente legalistas. Se reconoce, en efecto, que el enfrentamiento principal es entre el gobierno y sus asociados y el FMLN-FDR, con lo cual pasan a segundo plano otras fuerzas que disputan el poder al gobierno. De un lado están los que piensan que la legalidad es total en la parte que ha acatado la constitución y las elecciones y de otro lado están los que piensan que la constitución, las elecciones y su resultado son una cuestión de hecho a la que se contrapone otra cuestión de hecho que es la existencia de una verdadera guerra civil. Según se de importancia a un hecho o a otro, así se planteará la necesidad y las condiciones del diálogo. Aunque el gobierno no dé legalidad al FMLN-FDR, sí reconoce su realidad definitoria de la situación del país y aunque el FMLN-FDR no reconozca la plena legalidad del gobierno, sí reconoce su realidad definitoria de la situación del país. Se acepta, al menos, la fuerza real de ambas partes, ninguna de las cuales da síntomas de debilidad, después de cuatro años de durísima guerra. Si se ha consolidado de múltiples formas y en múltiples planos la parte gubernamental, también lo ha hecho el FMLN-FDR. Esta mayor fuerza obliga con un amplio margen de consenso nacional a ambas partes a abandonar posiciones legalistas o idealistas, abandono que facilita un proceso de búsqueda de soluciones a una situación sui generis, como la actual de El Salvador, que si

no es en sentido estricto de guerra civil -falta entre otras cosas división de territorios estrictamente entendida- tiene por otra parte muchas de sus características. Ambas partes y el país entero perciben que se necesitan remedios excepcionales para una situación excepcional, que no está contemplada en el marco de la constitución que hoy rige al país.

En segundo lugar, con el diálogo, entendido como proceso nacional y no meramente como reunión de unos cuantos dirigentes, se abren nuevas posibilidades políticas, al introducir en el contraste político a las fuerzas del FMLN-FDR que hasta ahora aparecían como ajenas a todo proceso político. El diálogo, tal como ha empezado a desarrollarse, es en sí mismo una apertura política y él mismo puede hacer mucho por ampliar y consolidar esa apertura. Hace todavía un año era impensable tal forma de diálogo e incluso son varias las fuerzas que lo estiman prematuro. La oferta del presidente Duarte plantea un marco que puede parecer insatisfactorio al FMLN-FDR, pero que le obliga a ciertas acciones, las cuales facilitan sin duda la apertura política. Si los miembros no sólo del FDR sino del FMLN pueden regresar al país cuando quieran y como quieran, si van a poder ejercitar una acción política a plena luz legal, entonces se supone que los escuadrones de la muerte van a poder ser controlados, que los cuerpos de seguridad van a ceñirse estrictamente a la legalidad, que las autoridades van a poder dar casi total seguridad a los ciudadanos... Si todo esto fuera realizable, es claro que la apertura política empezaría a ser posible. Puede parecer todavía utópico y por tanto el retraso en la aceptación y las medidas precautorias por parte del FMLN-FDR están justificadas, pero el mero ofrecimiento, como marco general del diálogo, es ya una apertura que compromete al gobier



no. Compromete al gobierno a hacer cumplir a fondo la constitución y lo compromete asimismo a llevar la constitución hasta sus últimos límites e incluso a su mejora; mientras esto no se logre, la oferta es poco segura. Si en cambio se logra en medida satisfactoria, esto supondría una importante consolidación democrática y un campo abierto para que, al menos, algunos sectores del FMLN-FDR puedan hacer presente su oferta política a una gran parte de la población, a la que hoy no tienen acceso efectivo y con la que le es muy difícil trabajar. Las posiciones extremistas que se expresaran en términos de todo o nada, no tienen razón de ser, no sólo al final del diálogo y su consecuente negociación, sino tampoco al principio. La compleja situación del país y la pluralidad de fuerzas poderosas que se hacen presentes en ella no permiten posiciones extremistas que por su simplismo desconocen la complejidad del problema y, por tanto, la procesualidad matizada que exige una verdadera solución.

5. Lo extremadamente distante de las posiciones iniciales sólo podrá ser superado mediante un paciente ejercicio de realismo que tenga ante los ojos el mayor bien posible del pueblo salvadoreño.

El levantamiento armado del FMLN pretendió romper revolucionariamente con el sistema capitalista y pro-imperialista que venía imperando en El Salvador, agudizadamente desde 1932 para imponer un sistema socialista. Desde este planteamiento y propósito es claro que sus metas y sus medios políticos suponían cambios radicales en la estructura social y en el ejercicio del poder. El discurrir de los acontecimientos desde 1979 ha podido demostrar al FMLN-FDR que sus metas más radicales son de momento inalcanzables y



y que, por tanto, deben ser rebajadas. Lo cual no quita que sus ideales puedan seguir siendo los mismos así como sus intereses fundamentales. Por su parte, el actual gobierno demócratacristiano pretende tan sólo romper con los excesos del sistema capitalista y pro-norteamericano, pero no con el sistema mismo, aunque la presencia y la vigencia del FMLN-FDR le haya urgido a planteamientos más radicales de los que suelen ser usuales en la internacional democristiana y de los que parecen aceptables a las fuerzas dominantes en El Salvador por más de cincuenta años. Tenemos, pues, unas diferencias de arranque muy importantes. Aunque ambas dicen responder a los intereses populares, entiende éstos de modo muy distinto. El reflejo de todo lo cual está en que Estados Unidos ve complacido una de las posiciones, mientras que la Unión Soviética ve complacida la contraria.

Adicionalmente ambas fuerzas en conflicto tienen muy distinto juicio sobre su propia legitimidad. El gobierno del presidente Duarte estima que su legitimidad es completa al haber surgido de unas elecciones libres y al ser respaldado por una constitución asimismo adornada de toda legalidad; subsidiariamente piensa que su legitimidad se acrecienta porque su política responde a las necesidades populares y a la voluntad de la mayoría con un plan de reformas capaz de terminar con los privilegios y la prepotencia de la oligarquía; finalmente estima que sus seis meses en el poder han demostrado que está en condiciones de llevar adelante serios proyectos de democratización y de cambios radicales: ya no estaríamos en las circunstancias anteriores a 1979 que hasta cierto punto legitimaba un levantamiento armado. El FMLN-FDR, por su parte, rechaza buena parte de esa legitimidad porque no se dieron condiciones idóneas para las elecciones en 1982 y en 1984 y porque



no se han dado cambios sustanciales que permitan hablar de que Duarte quiera y/o pueda resolver las injusticias seculares del país; fundamentalmente se considera justificado porque representa los verdaderos intereses de las mayorías populares y la causa principal que dinamiza los cambios necesarios en el país; finalmente, se considera como una fuerza real, capaz de poner en jaque el conjunto de la estructura social y militar y que debe ser tenida en cuenta, más allá de todo legalismo, por la justeza de su causa y por la fuerza de su poder, que no podía ser lo que es sin la ayuda y el apoyo de una parte de la población muy decidida a su favor.

Esta así las cosas, es claro que una presentación franca de sus posiciones en la mesa del diálogo tiene que suscitar un enorme desaliento y/o desafío. ¿Cómo conciliar intereses y puntos de vista tan contrapuestos? Sin embargo, las mismas causas y razones que les llevaron al diálogo, les deben llevar a buscar soluciones, en que ambas partes deben ceder no porque se haya alcanzado una síntesis que es de momento imposible sino porque se haya asegurado un proceso en el que de forma no violenta se puedan dirimir justamente los intereses contrapuestos.

Para lograrlo es menester alejar lo más posible las presiones de las superpotencias. Ante todo, la de Estados Unidos que por su tradición y su cercanía es la más interesada en hacerse presente y dominante en el país, y que está en condiciones de hacerlo porque la dependencia del actual gobierno y aun de toda la actual estructura es casi total respecto de las políticas y de los intereses norteamericanos. Pero también la del bloque soviético, cuyo influjo es mucho más lejano y mucho menos real. Sacar lo más



posible el enfrentamiento interno del enfrentamiento Este-Oeste debería ser un ideal operante por más que no alcanzable de modo satisfactorio.

Otro es el caso de los intereses centroamericanos y aun latinoamericanos. El Salvador no puede subsistir sin óptimas relaciones con sus vecinos y, por tanto, la solución que se busque para el país tiene que ser tal que no entre en pugna con las soluciones de los países hermanos. Lejano ideal de nuevo, pero que debe ser pacientemente perseguido, si es que las soluciones han de ser realistas y durables. Aunque los mismos problemas pueden llevar a planteamientos y soluciones distintas, el pluralismo que de ese hecho se desprende no puede convertirse en antagonismo que sería fatal para nuestros pueblos.

Y con ello tocamos el punto central que debe dirigir la marcha del diálogo y que puede llevar a ciertos acuerdos, no obstante la contraposición de intereses y de perspectivas. Ese punto central no puede ser la legalidad vigente, por más que la legalidad vigente tenga su razón de ser y su relativo derecho a ser respetada. Ese punto central tampoco puede ser la fuerza bruta con que cuentan las partes en conflicto, aunque el uso de la fuerza es desdichadamente un arma política de la que nadie quiere desprenderse a la hora de empujar los propios intereses. Ese punto central tiene que ser el mayor y más pronto bien posible de las mayorías populares. Puede parecer un tópico abstracto esa afirmación, pero hay que hacer de ella un principio operativo por más que lleve al abandono de actitudes maximalistas.

Aunque el hecho coyuntural más importante del país sea la guerra, no es la



guerra la realidad fundamental. La realidad fundamental es que cuatro quintas partes de la población viven en condiciones inhumanas, ante todo por la falta de desarrollo económico adecuado y casi en el mismo plano por la falta de distribución adecuada. La historia nos dice, sin duda, que esa falta de desarrollo y de distribución tiene la misma raíz: la imposición del sistema capitalista en el país. Pero eso no obsta para que se reconozca que este país que n nca ha tenido los recursos actuales para satisfacer ni siquiera mínimamente las necesidades básicas y los derechos fundamentales de la mayoría de la población, hoy los tiene menos que nunca y nunca los va a tener, si no se encuentra, ante todo, el final de la guerra, pero también un sistema económico y político, capaz de superar aquellos males estructurales que han hecho imposible la producción y la distribución adecuadas. Este debe ser, en consecuencia, el hilo conductor del diálogo y la fuerza superior capaz de aproximar las posiciones más distantes sin confundir ni por un instante lo que es bueno para la propia organización con lo que es bueno para las mayorías populares, ni mucho menos subordinar por años el beneficio de las mayorías populares a las ventajas del propio partido o de la propia organización.

Un paciente y lúcido ejercicio de realismo que tenga ante los ojos de la razón y del corazón el mayor bien posible -y en esa posibilidad cuenta mucho el tiempo- de la mayor parte del pueblo salvadoreño, ayudará a encontrar la verdadera solución, lo cual ciertamente no será factible si la solución no es verdadera, esto es, no es una solución que responda a las justas demandas de las mayorías populares, que podrían volver a ser engañadas por otro poco de tiempo, pero que de nuevo acabarían levantándose violentamente como res-



puesta a la violencia estructural e institucional que les es impuesta. Ni idealismos vacíos ni pragmatismos precipitados. Lo que se requiere es un realismo lúcido, que probablemente no va a contestar a ninguna de las partes en conflicto, ambas de las cuales tendrán mucho que ceder, pero que les puede favorecer a la larga en tanto en cuanto se comprometen con un largo proceso de servicio preferencial a las mayorías populares.

6. El objetivo principal y último del diálogo es alcanzar cuanto antes un verdadero proceso de pacificación que posibilite la superación de los males estructurales que dieron paso al enfrentamiento y a la guerra.

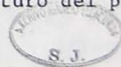
Debe hablarse por lo pronto de pacificación y no de paz. Es claro que el objetivo de la pacificación es la paz, pero la paz es mucho más que la ausencia de la guerra y la ausencia de toda forma de violencia. Lo que necesitamos ya imperiosamente es la puesta en marcha de un vigoroso proceso de pacificación, que vaya encaminado a mediano plazo a la finalización de la guerra.

El mal inmediato mayor para el pueblo salvadoreño es la guerra, tomada como el conjunto de acciones violentas que asolan al país, aunque su manifestación más llamativa es la lucha armada entre dos ejércitos poderosos. La guerra es desde luego resultado de los males estructurales y no causa de ellos, pero es actualmente un gran impedimento para terminar con algunos de ellos y para empezar la reconstrucción socio-económica, política y cultural del país. Que sea un gran impedimento no quiere decir que carezca de toda justificación y que incluso haya servido de modo indirecto para hacer avanzar de hecho la causa de la justicia. Esta afirmación que puede



parecer escandalosa tiene firme sustentación: sin la constitución primero del FMLN y sin el subsiguiente levantamiento armado es improbable que se hubieran conseguido los avances sociales y políticos que se han logrado desde 1979, y, en cambio, sería lo más seguro que hubiera sido la oligarquía quien de nuevo hubiera tomado las riendas de la estructura económica, política y militar del país. Los tímidos intentos de reforma o transformación agraria de 1973 y 1976 fueron arrasados, porque entonces no se sentía el peso y el peligro de los movimientos revolucionarios. Y es todavía la presión del FMLN la que mantiene la necesidad de avanzar en las transformaciones sociales y en los derechos humanos para superar las causas objetivas que les pueden seguir dando vigencia.

Pero, aun siendo esto así, la guerra trae en la actualidad enormes males. Están ante todo los muertos y los heridos que sobrepasan los diez mil al año; están los desplazados dentro y fuera del país que ya alcanzan a casi una cuarta parte de la población; está la destrucción de la infraestructura económica a un costo que supera los mil millones de dólares; consume más del cuarenta por ciento del presupuesto nacional a lo que deben sumarse otros doscientos millones de dólares anuales de la ayuda norteamericana que van también a aumentar la destrucción y los destrozos de la guerra. Desde un punto de vista político hace al país cada vez más dependiente de Estados Unidos tanto en lo militar como en lo económico, reduciendo a límites inaceptables la soberanía nacional, a la par que imposibilita casi todo el esfuerzo político del FMLN-FDR entre la mayor parte de la población. La guerra sigue destruyendo al país física y moralmente y hace cada vez más difícil un proceso de reconstrucción, sin el cual el futuro del país y



de la población será para las próximas décadas más oscuro y doloroso de lo que fue en los años cincuenta.

Por todo ello es necesario que el diálogo busque los caminos para una pronta pacificación. A ella deben contribuir todas las fuerzas sociales, pero sobre todo las que son inmediatamente responsables de la guerra. En el interior estas fuerzas son de un lado el FMLN-FDR y de otro el gobierno, incluido en él de modo expreso y con suficiente autonomía la Fuerza Armada. Lo que está más en las manos de las partes dialogantes es la guerra y sólo esas partes pueden decidir el fin dialogado de la guerra y, mientras tanto, la paulatina reducción de la misma. El gobierno puede emprender otras tareas por sí sólo, pero no puede emprender la urgente tarea de terminar con ella, si el FMLN no acepta asimismo el concluirla. A Estados Unidos y a la Fuerza Armada les queda el recurso de finalizar la guerra por vía estrictamente militar, con lo cual pueden pensar que salvan mejor sus intereses a corto y mediano plazo. Pero al gobierno no le queda otro camino que el de dialogar y negociar -en tanto le dejan la Fuerza Armada y Estados Unidos- con el FMLN-FDR, pues de una solución militar los civiles y los partidos políticos sólo pueden sacar desventajas. Si, por otra parte, la guerra no termina, al gobierno actual se le reduce drásticamente toda capacidad de gobernar: no es posible ningún tipo de desarrollo mientras prosiga la guerra en los niveles actuales, no es posible la consolidación del poder civil mientras los militares sean más necesario que nunca, no es posible una política nacionalista mientras la presencia hegemónica de Estados Unidos sea imprescindible para no perder la guerra y para no caer en un caos económico, no es posible el éxito de las reformas estructu



rales mientras no se den mínimas condiciones para su fortalecimiento. Tampoco al FMLN-FDR le es posible empezar a desarrollar positivamente su trabajo, si es que la guerra no concluye; mientras toda su energía y la mayor parte de sus recursos estén orientados en tareas militaristas, no sólo no estarán contribuyendo a la reconstrucción del país sino que no estarán llegando al corazón de las masas, que ya no comprenden a donde va una guerra, cuyos resultados son para ellas de momento más negativos que esperanzadores; podrá ser admirable que no sean derrotados, podrá ser importante que se consoliden organizativamente, pero todo ello ha de quedar subordinado a una acción constructiva en favor de las mayorías, cosa que no es posible mientras la guerra perdure y se profundice.

No se trata con ello de terminar con la guerra de cualquier modo. No se puede terminar con la guerra más que cuando haya la seguridad razonable de que no volverán a darse las condiciones que la hicieron estallar. Esto no implica el que deba esperarse a la superación de los males e injusticias estructurales que secularmente han crucificado al país, pues tal tarea lo es de todos y por mucho tiempo. Implica tan sólo que se asegure una situación global y una correlación de fuerzas que impulsen el proceso justo para conseguirla de una forma eficaz, lo cual exige sin duda la presencia activa en el proceso de quienes más han hecho por cambiar las cosas. El fin de las hostilidades sin garantías suficientes no traería la pacificación y, menos aún, una paz justa y consolidada. Las mismas causas y los mismos agentes producirían antes o después los mismos efectos, si siguen iguales en la fundamental las mismas circunstancias. Desde otro punto de vista sería una vergüenza nacional que hubiera sido en vano tanta sangre derramada y



tanto trabajo realizado,, y lo sería, si no se lograra un avance sustancial hacia un nuevo orden social, no estructurado según los intereses de las minorías sino según las necesidades y la voluntad de las mayorías. Son, por tanto, necesarias algunas garantías fundamentales sustentadas por quienes tienen el poder y la decisión de mantenerlas. Como garantías indispensables han de considerarse: a) que la oligarquía no siga siendo el poder hegemónico, ni que lo sea en su sustitución la gran empresa privada; b) que la Fuerza Armada no pueda ser brazo armado de los intereses oligárquicos ni de los intereses norteamericanos, ni siquiera de sus propios intereses, sino que esté subordinada completamente al poder civil legítimamente establecido y limitada a desempeñar las funciones que le atribuye la constitución; c) que se termine con la sistemática violación de los derechos humanos y que se desarticule de forma total las organizaciones que la hicieron posible; d) que se extiendan, profundicen y consoliden las reformas estructurales de modo que las mayorías se beneficien equitativamente de los recursos nacionales y el poder quede democráticamente distribuido; e) que se asegure la apertura política y social de modo que todas las fuerzas sociales y todos los intereses puedan ser defendidos y propugnados; f) que el poder del Estado se utilice preferentemente en el mejoramiento de las mayorías populares y no en beneficio de los más favorecidos.

Este conjunto de garantías necesita ser respaldado por el poder y la fuerza de los movimientos revolucionarios. La actual correlación de fuerzas en la parte gubernamental no permite hacerse muchas ilusiones. Los hábitos del pasado no se han roto. Ha habido desde luego cambios, pero esos cambios no son ni seguros ni irreversibles. En las actuales circunstan-



cias es difícil de aceptar que el gobierno del Presidente Duarte esté en capacidad de garantizar lo que ofreció en su primera propuesta. Gobiernos más fuertes que el suyo se han visto incapaces en la reciente historia latinoamericana de resistir al ruido de los sables, incentivo del dinero y a la voluntad de los norteamericanos. Al menor peligro de que las garantías ofrecidas pudieran llevar al FMLN al poder, todo volvería atrás con la justificación ya tantas veces usada de que el comunismo es un mal absoluto que debe ser combatido absolutamente, cualesquiera sean los medios que se estimen necesarios para ello.

Si se quiere, por tanto, que los movimientos revolucionarios dejen el camino de las armas, es necesario que se arbitren los medios necesarios para poder pasar de la lucha armada a la lucha política. El determinar cuáles son esos medios necesarios y suficientes es cuestión de diálogo y últimamente de negociación. En uno y en otra habrá de tenerse en cuenta el orden constitucional vigente, pero no como una norma absoluta restrictivamente interpretada; son claros los límites intrínsecos y extrínsecos de la constitución de diálogo y últimamente de negociación. En uno y en otra habrá de tenerse en cuenta el orden constitucional vigente, pero no como una norma absoluta restrictivamente interpretada; son claros los límites intrínsecos y extrínsecos de la constitución y debe ser también clara la sumisión del orden constitucional al orden de los fines últimos que persigue toda constitución. Lo que importa aquí no es tanto la letra como el espíritu, y es posible pensar que el espíritu de la constitución, leído en el actual contexto histórico y apoyado por un fuerte consenso nacional, permite muchas cosas de las que se piensa y de las que actualmente se dice que son



inalcanzables por ser estrictamente anticonstitucionales.

7.- El diálogo debe tender a conseguir cuanto antes limitar al máximo los males que produce la guerra.

Ante todo debe procurarse que el nivel de guerra no se acreciente. Llevamos cuatro años de guerra en que fundamentalmente se ha mantenido el equilibrio, que hace imposible la victoria de uno de los bandos, con lo que la guerra se hace cada vez más costosa y destructiva sin que se rompa ese equilibrio. El acrecentamiento de los niveles, según la experiencia pasada, llevaría a una mayor destrucción y no a un cambio sustantivo. Este no acrecentamiento de la guerra se lograría, si se suspendiera absolutamente toda ayuda militar del extranjero; esta ayuda, más que a resolver el conflicto contribuye a prolongarlo y endurecerlo. Reducido el conflicto a fuerzas estrictamente nacionales se hace más manejable y menos destructivo. Hará falta establecer controles que impidan la presencia militar extranjera en el país de hombres y recursos bélicos. Suspendida la ayuda militar extranjera con las garantías suficientes, se debería asimismo frenar el crecimiento de ambos ejércitos en los límites actuales.

Mientras el conflicto se prolonga es menester humanizarlo al máximo posible. Esta humanización exige, por lo pronto, el escrupuloso cumplimiento de los ordenamientos jurídicos, internacionalmente reconocidos, que tienden a disminuir los horrores de la guerra. De nada sirve decir que la guerra en El Salvador no es una guerra reconocida como tal. Es un hecho y como tal causa todos los males propios de la guerra y como tal debe ser sometida a las limitaciones que usualmente se impone a la guerra. Pero esa humanización



debe ir lo más lejos posible. En eso hay mucho que avanzar por parte y parte, en eso hay mucho que conceder por parte y parte. La prioridad está en los aspectos que dicen relación directa con la vida humana de modo que queden suspendidos todos los actos que van contra ella y contra la dignidad de la persona humana, pero puede y debe extenderse paulatinamente a otros aspectos.

Especial consideración merece lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos y, más específicamente, con toda forma de terrorismo. Cualesquiera hayan sido los cambios favorables que puedan estimarse en la cuestión de los derechos humanos en El Salvador, el relator especial de las Naciones Unidas sigue apreciando importantes y graves violaciones de los mismos. Habla de que las violaciones se dan en ambos bandos, aunque reconoce que de manera desigual, siendo más graves y numerosas en el campo gubernamental. Las violaciones de los derechos humanos han sido en El Salvador parte de la guerra, parte sustancial de la violencia armada. Las más de las veces han tomado el carácter de terrorismo de estado y han sido un arma más para combatir al enemigo revolucionario. También ha habido terrorismo por parte del FMLN, entendido como tal no la lucha estrictamente militar de hombres armados contra hombres armados, sino el secuestro y el asesinato de civiles o de militares que no estaban en condiciones de defenderse. Todo lo que fuera mejora en esta línea, donde hay todavía mucho que mejorar, sería un grave avance no sólo en y por sí mismo, sino también como forma de pacificación que objetiva y subjetivamente puede acercar más la paz.

Pero el conflicto no sólo deber ser humanizado, no sólo debe ser contenido para que no se expanda ni radicalice, sino que debe tenderse a reducirlo.



Debe limitarse al máximo su violencia, debe reducirse al máximo su capacidad de destrucción. La Fuerza Armada viene haciendo un uso, criticado por defensores imparciales de los derechos humanos, de distintas formas de bombardeo masivo que causan muchas bajas entre la población civil y destrucción en las zonas afectadas. El FMLN hace punto fundamental de su estrategia militar el sabotaje que destruye no sólo cosechas sino lo que es más grave la infraestructura económica sobre todo en el sistema de comunicaciones y de la energía eléctrica. Ambas formas de destrucción que son parte importante de cada una de las estrategias militares, pero que traen graves consecuencias a la población y al futuro del país pueden ir disminuyendo si se logra un acuerdo equitativo. También puede avanzarse en esta línea de disminución de la guerra por el camino de la tregua y eventualmente del cese del fuego; cualquier día que pase sin muertes y destrucción bélicas es un día ganado para la paz y es un paso adelante en la pacificación, que el pueblo agradecerá porque servirá para aumentar su esperanza y consecuentemente su apoyo al proceso pacificador.

Todos estos puntos y otros similares que vayan en la misma dirección exigirán cuidadosos medios de control. Sin desconocer su necesidad tanto a la hora de definir los acuerdos como de exigir su cumplimiento, lo más importante sería que el pueblo, la opinión pública, fuera el animador principal y el controlador último, porque en definitiva será el pueblo quien dé o quite la razón, quien dé o quite su respaldo a unos o a otros.

8. El diálogo debe asegurar aquellos aspectos políticos sin los cuales el objetivo principal de la pacificación no es posible ni siquiera como proceso.



Si la condición ineludible para el cese de la guerra es que se habilite otra vía distinta eficaz, es imprescindible que se logren algunos acuerdos políticos que permitan transitar segura y eficazmente por esa nueva vía. La parte gubernamental reitera que esa vía es la de las elecciones, pero la vía electoral no es en este momento todavía una alternativa al uso de las armas, porque no se dan condiciones adecuadas para una plena participación política del FMLN-FDR y menos las condiciones para que se respete un posible triunfo electoral de sus candidatos. Entre esas condiciones está, como una de las principales y también más difíciles, la institucionalización de una Fuerza Armada y de unos cuerpos de seguridad, que respeten plenamente la actividad política y que no interfieran de modo alguno con la voluntad popular. Decir que esto ya se está dando sería pecar de optimismo y de inobjetividad. Ciertamente pueden reconocerse algunas mejoras, incluso importantes, pero con la misma certeza debe asegurarse que son insuficientes. Son insuficientes a la hora de pedir responsabilidad por la masiva y sistemática violación de los derechos humanos, sobre todo en el período 1980-1982; son insuficientes a la hora de poder decir que jefes y oficiales han cambiado drásticamente en sus hábitos, en sus actitudes y en sus formas colectivas de actuar; son insuficientes a la hora de asegurar que el proceso de mejora vaya con la rapidez y la radicalidad que exige la situación salvadoreña. Mientras no se de esta mejora radical de la Fuerza Armada, el FMLN-FDR tiene razones objetivas para desconfiar de ella y para exigir medidas drásticas y profundas de cambio que le permitan responsablemente renunciar a un poder militar paralelo, tal como el que actualmente poseen. Problema difícil por parte y parte, pero que vista la historia de El



Salvador pasada y reciente, es esencial resolver. Es posible que la solución última esté en la desmilitarización de la República. Pero tal desmilitarización es difícil por razones internas y externas. Hasta que no se dé hay que entrar de lleno en una profunda reforma militar y entrar de lleno en ella cuanto antes.

Sin embargo, pueden adelantarse otras medidas políticas que permitan al FMLN-FDR trasvasar su accionar militar a un accionar político. Ese trasvase sólo podrá ser paulatino, paso a paso. Es irrealista pedir al FMLN que abandone las armas de un golpe para permitirle la acción política, porque el respaldo de ésta por el momento está en el poder que le dan las armas. Podrá decirse que esto es políticamente heterodoxo, pero sólo si se ignora de dónde venimos, dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Tal vez podría pedirse un cesè previo en el uso de las armas, pero es obvio que esto no va a ser concedido, si la otra parte no cesa también en el uso de las armas; problema, por otra parte, difícil porque hay tareas de seguridad nacional que ineludiblemente deben ser cumplidas. Estamos ante un proceso, cuyos pasos deben ser muy seguros, aunque no sean ni muy largos ni muy rápidos.

El paso político fundamental sería el asegurar todo tipo de actividad política que no tuviera que ver directamente con la violencia. Por parte y parte cabe una separación metodológica entre lo que es lucha militar y lo que es lucha política, cualesquiera sean las conexiones entre una y otra. En otro editorial hablábamos de la suspensión del delito político, que hoy en El Salvador se entiende como actividad favorecedora del FMLN-FDR. Sin repe





tir la experiencia de 1980 con la Coordinadora revolucionaria de masas, ane-
gada en sangre por la represión tanto pública como clandestina desde el Es-
tado, puede pensarse en formas alternativas nuevas, que permitan poner me-
nor acento en las acciones militares y mayor en las acciones sindicales,
gremiales, políticas. La entrada en una fase nueva obligaría al FMLN-FDR a
repensar el conjunto de su actividad y obligaría al gobierno correlativamen-
te a enfrentar el nuevo desafío no policialmente y menos terrorísticamente
sino políticamente. Lo mismo tendrían que hacer las demás fuerzas políti-
cas y sociales que debieran disputar por sus propios medios políticos la
cuota de poder que pretenden alcanzar tanto en la sociedad como en el esta-
do.

Este primer paso conlleva necesariamente la más escrupulosa legalidad en
todas las actividades de los cuerpos de seguridad, tanto cuando van unifor-
mados como cuando van vestidos de civil. Ha habido en esto mejoras y el
proceso parece que tiende a mejorar. No obstante, sigue habiendo excesos
que imposibilitan el confiar en acciones no cláandestinas, en acciones no
violentas. Mayor urgencia aún tiene el total control de los escuadrones de
la muerte o sus similares tanto en la ciudad como en el campo. Las vincula-
ciones antiguas de los escuadrones de la muerte con la estructura militar
está fuera de toda duda, hasta el punto de que algunos jefes y oficiales
han sido separados de una u otra forma de la Fuerza Armada por ese motivo.
No puede asegurarse que esas vinculaciones no sigan y menos aún puede certi-
ficarse que los cuerpos de seguridad hayan aclarado ni siquiera de manera
mínimamente satisfactoria cuáles eran las redes y los responsables de accio-
nes asesinas que han causado más de cuarenta mil muertos. De cara al pre-



sente y al futuro queda a los cuerpos de seguridad y a la Fuerza Armada el cortar a rajatabla ese tipo de acciones.

La revisión de la legalidad vigente en materias restrictivas de la actividad política es otro punto importante. Ciertamente sigue la guerra civil y esto puede exigir algún tipo de medidas restrictivas. Pero no puede decirse que estamos a la altura de 1980, cuando casi se institucionalizó el estado de sitio, que viene siendo reiterado mecánicamente cada mes. Si el gobierno asegura que las cosas han cambiado sustancialmente, debiera confirmar ese juicio mediante la abolición del estado de sitio. Lo mismo cabe decir de otra serie de decretos que tienden a limitar drásticamente no sólo la actividad política sino la disposición de los ciudadanos a emprenderla. Si se busca una normalización política hay que ir la favoreciendo en la línea de las leyes y de los decretos así como en la línea de crear un nuevo ambiente que multiplique la participación de la mayor parte de los ciudadanos en el quehacer nacional.

En este contexto debe hablarse de la amnistía. No repetiremos lo que hay dijimos sobre ella en el editorial del mes de septiembre. La amnistía de los actuales presos políticos puede ser un signo favorecedor del diálogo y hasta cierto punto favorecedor de la apertura política. Pero lo importante es que se reduzca al máximo y se legisle mejor la figura misma del delito político. También que se normalice y se agilice el proceso de quienes son inculcados. Esto nos debería llevar a hablar del lastimoso estado en que por muchos motivos está el desempeño del poder judicial en El Salvador. Pero esta es una cuestión que desborda de momento el marco de un posible



diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR, aunque es una prueba más de lo irregular e inaceptable de nuestra situación social.

9. El diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR debe ampliarse hasta conver
tirse en diálogo nacional.

Lo más urgente y aun importante en el momento actual es iniciar un proceso de pacificación que está sobre todo en manos del gobierno y del FMLN-FDR. Este diálogo es insustituible, está plenamente legitimado por razones de hecho y por razones más hondas de justicia, aunque tal vez se le puedan poner obstáculos de tipo legalista. Todas las fuerzas sociales del país, que busquen sinceramente la mejoría pronta de la situación, deberían apoyarlo, aun que fuera de manera crítica. Sin pasos concretos fundamentales que deban dar el gobierno y el FMLN-FDR la situación no puede ir sino a peor. Pero no por eso el diálogo ha de reducirse a una cuestión que han de dirimir sólo ambas fuerzas en conflicto. Hay muchos sectores salvadoreños que no se sienten plenamente representados ni por una ni por otra y hay temas de gran envergadura que no tienen por qué ser decididos por ambas tan sólo. Por otro lado, el país entero necesita participar primero en apoyo de ese diálogo, cosa que lo está haciendo de diversas formas y a través de distintas manifestaciones, y después en la discusión nacional que vaya buscando y encontrando un consenso, sin el cual se hace imposible la pacificación y, en definitiva, la paz.

Hay un peligro de que la parte gubernamental y la parte revolucionaria se arroguen prerrogativas que no les competen. Es mucho lo que ambas partes pueden y consiguientemente deben hacer para resolver el conflicto, pero esa



obligación no les faculta para decidir de todo. No es sólo que el ejecutivo tiene que respetar las competencias del poder legislativo y del judicial, ni que el FMLN-FDR tiene que reconocer la existencia de fuerzas sociales que no le han dado su representación; es también que los grandes problemas nacionales desbordan las competencias y las posibilidades de unos y de otros. Una interpretación que dividiera toda la realidad política del país entre la parte gubernamental y la parte revolucionaria, fuese la que fuese la cuota de legalidad y de poder distinta que se atribuyere a cada una de ellas, desfiguraría esa realidad. Por ello atribuir al diálogo ya iniciado el encontrar las soluciones de todos los problemas principales o las líneas generales de lo que debiera ser el marco constitucional o equivamente en que hayan de resolverse sería caer en una forma de estatismo inaceptable.

Este propósito más amplio compete a un diálogo nacional, sea éste formal o informal. No basta el cauce de la representación gubernamental y de la representación revolucionaria, pero tampoco basta el cauce de los partidos políticos. Los problemas sociales son más amplios y más profundos que los problemas políticos y si estos mal que bien tienen ya cauce por el que expresarse, aquellos no lo tienen. La tremenda sacudida histórica que ha sufrido El Salvador en estos cinco años no ha quedado todavía calmada y sus consecuencias no han sido todavía recogidas en lo que puede llamarse el nuevo orden constitucional. Ciertamente el gran problema nacional no estaba en la constitución vigente y, consiguientemente, no se arregla cambiando la constitución en algunas partes, que si dan paso a un mayor pluralismo, no por eso responden a la realidad social de El Salvador. Lo importante no es entonces un nuevo cambio constitucional sino el logro real de un consen-



so mayoritario sobre los grandes problemas que afectan al país. Y esto exi
ge el que se pueda establecer un verdadero diálogo nacional. Este diálogo
debe ser nacional en cuanto se traten en él los grandes problemas naciona-
les y debe serlo también porque en él participen los distintos sectores na
cionales, sobre todo aquellos que están organizados o que se ven mejor re-
presentados por una u otra organización social: sindicatos, gremios, cole-
gios profesionales, universidades, iglesias y tantos otros de verdadera
significación real, mayor muchas veces a la de los partidos, aunque no bus-
quen como éstos el poder del estado. Los medios de comunicación social po-
drían en parte ser canales de esta comunicación, aunque sin olvidar que al-
gunos de ellos defienden intereses muy próximos a la extrema derecha del
país y, desde luego, a los sectores más afines al gran capital.

10. Ir realizando el diálogo de modo que se fortalezca el diálogo.

El diálogo no es un fin último en sí mismo, aunque sea siempre fructífero,
si es que no se toma en un sentido puramente táctico para disimular intere-
ses contrarios al mismo. Pero el diálogo iniciado en El Salvador entre el
gobierno y el FMLN, que hemos definido como una necesidad nacional, que en
sus primeros pasos ha encontrado una gran resonancia popular llena de ex-
pectativas, que ha sido emprendido por ambas partes con seriedad y firmeza,
que en sí mismo es un avance importante hacia la solución del conflicto sal
vadorenño, que se enfrenta a una problemática realmente difícil porque en
él se hacen presentes intereses muy distanciados, que puede dar pasos im-
portantes en favor de la pacificación y antes de la humanización de la gue-
rra, que puede facilitar medidas políticas importantes, es por todas estas

razones un paso fundamental en la historia del país.



El peligro mayor del diálogo no es por lo pronto que resulte infructuoso de momento sino que quede interrumpido, cuando no roto. Desde este punto de vista es imprudente empezar a proponer en él tales exigencias que hagan imposible su continuación. Es todavía una planta tan débil que cualquier inclemencia destemplada puede destruirla. Y esto sería fatal. Mucho, muchísimo ha costado llegar a la mesa del diálogo. No ha sido sólo cuestión de tiempo; ha sido cuestión de sangre, de muertos, de destrucción, de prolongación de la agonía del pueblo salvadoreño. El gobierno ha sido audaz en proponerlo a la luz pública, sabiendo que son poderosas las fuerzas que se oponen a él; el FMLN-FDR ha sido audaz en aceptarlo porque hasta cierto punto le obliga a recomponer su modo de actuar, no obstante que el ofrecimiento del mismo venía siendo habitual en todas sus propuestas de solución al conflicto. Errores graves de un lado o de otro serían ahora fatales para el proceso del país y dejarían la solución en manos militaristas que confían en el aumento de la violencia para terminar con la guerra. Todos sabemos quiénes se alegrarían del fracaso del diálogo. Y son quienes buscan su fracaso los que deben ser aislados en este momento del proceso histórico. En la mesa del diálogo nacional caben sin duda muchos participantes y en la mesa del diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR caben muchas coincidencias fundamentales, si se tiene en cuenta quién ha sido tradicionalmente en el interior del país el que ha impedido que el pueblo salvadoreño fuese el sujeto de su destino histórico y cuáles han sido los medios a través de los cuales se ha impedido la autodeterminación y la consecución de la justicia social.



Salvar el diálogo, consolidar el diálogo. Este es hoy uno de los principales mandamientos nacionales en los que se resumen otros muchos. Precisamente porque el arreglo no es fácil, es de todo punto imprescindible que el diálogo se fortalezca. Para ello es necesario reducir al máximo la desconfianza del que se estima ser oponente, la desconfianza mutua, lo cual no lleva consigo necesariamente caer en ingenuidades. Para ello es necesario que las propuestas en cada paso sean razonables porque se acomodan al momento y porque suponen de parte y parte cesiones y conquistas equitativas. Para ello es necesario no romper, no desesperarse.

Buena parte de responsabilidad en este no rompimiento y en esta consolidación le compete al arzobispo de San Salvador, Monseñor Rivera Damas, que ha sido aceptado por ambas partes como moderador de los encuentros, pero cuya función animador se extiende más allá de los límites de un simple moderador. El representa un testigo fiel y objetivo que ha sido uno de los mayores impulsores del diálogo desde el principio del conflicto, cuando serlo suponía un gran riesgo. Ambas partes pueden aceptar sus buenos oficios y no sería razonable que ninguna de ellas dudara de su imparcialidad y de su amor por la paz justa.

No hay mucho tiempo. La paz urge. Ojalá el diálogo la haga más próxima y más profunda, más humana y más firme. Es responsabilidad de todos.

28 de noviembre de 1984.